

Expediente gubernativo 30/2020

ACUERDO GUBERNATIVO

En Segovia, a dieciséis de marzo de 15 de marzo de 2020.

ANTECEDENTES

PRIMERO. En fecha de hoy se ha recibido vía email por esta Presidencia escrito remitido por el Sr. Juez de Primera Instancia e Instrucción de Cuéllar en que se pone de relieve que

SEGUNDO. En base a esa comunicación, por el mismo se solicita: *“las medidas que puedan ser convenientes para salvar la situación, en protección de los intereses de salud que están por medio, incluso con la posibilidad de suspender la presencia de toda persona (también el personal) en el edificio judicial en tanto no se practique una desinfección del edificio adecuada a la situación.*

En lo que a mí se refiere, si he de seguir escrupulosamente las prevenciones oficiales sanitarias dictadas por todas autoridades y por los médicos que tengo a mi alcance (esencialmente para prevenir contagio a otras personas) , no parece que deba asistir en forma ordinaria a la sede del Juzgado, pero creo que me encuentro con posibilidades de abordar desde el actual aislamiento en mi domicilio cualquier solución a los asuntos de guardia por vía telefónica , telemática , y también videoconferencia. Y desde luego así expreso mi disposición sin duda, salvo empeoramiento evidente”.

TERCERO. Consultados al respecto la Sra. Magistrada Juez de Guardia de los Juzgados de Segovia y el Sr. Magistrado Juez Decano, que entrará de guardia el próximo jueves, por los mismos se muestra su disponibilidad a asumir las funciones de recepción, registro y legalización de las causas penales con detenidos de Sepúlveda.

FUNDAMENTOS

PRIMERO. La Disposición adicional segunda del RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, dispone: “1. *Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se*

**AUDIENCIA PROVINCIAL
DE SEGOVIA
Presidencia**

reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

2. En el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no se aplicará a los procedimientos de habeas corpus, a las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores.

Asimismo, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente podrá acordar la práctica de aquellas actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables.

3. En relación con el resto de órdenes jurisdiccionales la interrupción a la que se refiere el apartado primero no será de aplicación a los siguientes supuestos:

a) El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ni a la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8.6 de la citada ley.

b) Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas regulados en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

c) La autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico prevista en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

d) La adopción de medidas o disposiciones de protección del menor previstas en el artículo 158 del Código Civil.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez o tribunal podrá acordar la práctica de cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso”.

Por su parte el Acuerdo de 13 de marzo de 2020 del CGPJ en que se fijan los servicios esenciales en caso de escenario 3, extendido a todo el territorio nacional por Acuerdo de 14 de marzo, dispone en su punto 12 que “El/la Presidente/a del Tribunal Superior de Justicia, el/la Presidente/a de la Audiencia Provincial y el/la Juez/a Decano/a adoptarán las medidas que procedan relativas al cese de actividad en las dependencias judiciales en que se encuentren sus respectivas sedes, y cierre y/o desalojo de las mismas en caso de que procediera, poniéndolo en conocimiento y en coordinación con la Comisión de Seguimiento competente”.

**AUDIENCIA PROVINCIAL
DE SEGOVIA
Presidencia**

A su vez, el artículo 21.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario está obligado a adoptar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente. Y a su vez el art. 21.2 dispone que el trabajador tiene derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su salud.

SEGUNDO. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cuéllar es un Juzgado único, con una plantilla ajustada que desarrolla su trabajo en un espacio limitado. En esta situación, el riesgo de transmisión del virus entre los funcionarios del Juzgado es evidente, por lo que en virtud de las recomendaciones sanitarias, los funcionarios que hubieran mantenido un contacto próximo con el juez supuestamente afectado deberían ponerse en cuarentena durante catorce días, con las prevenciones recomendadas por las autoridades sanitarias.

En todo caso se hace imprescindible, tal y como se solicita, sin perjuicio de la evaluación sanitaria, la desinfección de la sede del órgano judicial a fin de evitar el riesgo de que permanezca algún foco de contagio, antes de reanudar la actividad del mismo.

Este riesgo además se produce no sólo respecto de los funcionarios que ya han estado en contacto con ella, sino ante la posible transmisión que podría suponer seguir realizando actividades con ciudadanos o profesionales en el órgano judicial.

Tanto una como otra situación aconsejan el cierre de la sede del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cuéllar, en tanto se procede a la desinfección y en su caso cuarentena de los funcionarios, decisión que adopta esta Presidencia en base a la delegación efectuada por el CGPJ, y previa consulta al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

TERCERO. Al ser un Juzgado único se plantea la forma en que deban mantenerse los servicios esenciales previstos en los acuerdos citados y en el RD 463/2020.

**AUDIENCIA PROVINCIAL
DE SEGOVIA
Presidencia**

Por el juez solicitante de la medida se muestra su disponibilidad para seguir desempeñando sus funciones desde fuera de la sede haciendo uso de las tecnologías puestas a su disposición por el Ministerio de Justicia.

Previa consulta con la Juez de Guardia y el Juez Decano de Segovia, se entiende que dada la circunstancia excepcional en la que nos encontramos, que supone el cierre del juzgado y la no asistencia de los funcionarios, de forma igualmente excepcional, la actividad de recepción, registro y legalización de las causas penales con detenidos o violencia contra la mujer serán efectuadas por el Juzgado de Guardia correspondiente de Segovia. Una vez legalizada la situación del detenido el Juzgado de Guardia de Segovia procederá a su inhibición a favor del de Cuéllar, para su tramitación ordinaria una vez que la situación de clausura haya concluido.

No resulta posible acudir a las normas ordinarias de sustitución entre jueces previstas en la LOPJ en tanto que la afectación es a la totalidad del órgano judicial, no sólo a su titular, que aunque en cuarentena no está en situación de baja laboral, a lo que debe añadirse que el sustituto natural de Cuéllar, el Juzgado de Sepúlveda, se encuentra igualmente cerrado de forma provisional y su titular en situación de encuentra en cuarentena ante el caso registrado en aquel órgano; pero la necesidad del expediente digital y el cierre del Juzgado de Cuéllar obligan a adoptar esta decisión excepcional, que en todo caso no se considera cause perjuicio al justiciable ni le produzca indefensión.

Si fuese precisa la realización de alguna diligencia penal fuera del órgano judicial de carácter penal, como levantamiento de cadáver, dado que la misma no se lleva a cabo en la sede judicial clausurada, deberá ser realizada por Juez sustituto natural del titular del Juzgado (pues es el propio juez el que presenta sintomatología compatible con el COVID 19), el de Sepúlveda, manteniendo las debidas medidas de precaución,

En cuanto a las actuaciones necesarias de Registro Civil, la expedición de licencias de enterramiento, como las restantes definidas en la Instrucción CGPJ de darse el caso, serán recibidas por la Sra. LAJ del Juzgado de Cuéllar quien se encargará de su tramitación y su comunicación a la empresa funeraria que la solicite, cuando se trate de licencia de enterramiento. En otro caso las solicitudes de particulares se deberán hacer previa cita telefónica o por correo electrónico, a cuyo fin en la puerta de la sede judicial deberá colocarse en lugar visible el teléfono o dirección de contacto. Tanto la solicitud como la comunicación se efectuarán en la medida de lo posible por medios telemáticos.

Respecto de las diligencias urgentes en materia civil, a la vista del acuerdo del Sr. Juez Decano de Segovia del día de hoy en relación con la asunción por el

**AUDIENCIA PROVINCIAL
DE SEGOVIA
Presidencia**

Juzgado de Guardia de Segovia de las decisiones sobre internamientos o medidas del art. 158 CC, se procederá de idéntica forma que en el caso de detenidos o asuntos de violencia de género antes descrito.

CUARTO. Esta comunicación deberá ser puesta en conocimiento de los Colegios de Abogados y Procuradores de esta Provincia; así como de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, las cuales deberán remitir los atestados y en su caso presentar los detenidos ante el juzgado de Guardia de Segovia, desde el momento de esta comunicación hasta que la situación de cierre del Juzgado de Sepúlveda sea levantada.

Por todo lo expuesto,

ACUERDO:

1. Se declara el cierre provisional de la sede del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cuéllar, durante un máximo de catorce días, o hasta que se lleve a cabo la desinfección del mismo o hasta que el resultado de la prueba del COVID 19 sea negativa en el juez que presenta síntomas, si alguno de estos eventos tuviese lugar con antelación.
2. Sin perjuicio de la decisión que se adopte al respecto por el Ministerio de Justicia, como gestor del personal al servicio de la Administración de Justicia, los funcionarios del órgano judicial y la LAJ que hayan mantenido una relación de proximidad con el juez con sintomatología, deberían adoptar las medidas preventivas de cuarentena previstas por las autoridades sanitarias en tanto se confirma o desmiente el contagio.
3. Solicítese de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia, se proceda, si las autoridades sanitarias lo estiman preciso, a la desinfección de la sede del órgano judicial, a fin de permitir la reanudación de su actividad.
4. En tanto se produzca el cierre del juzgado y la falta de asistencia de los funcionarios, los servicios esenciales se tramitarán de forma absolutamente excepcional del siguiente modo:
 - Asuntos penales improrrogables: La recepción y registro de las causas penales con detenidos, así como de violencia contra la mujer, será efectuada por el Juzgado de Guardia correspondiente de Segovia, que lo registrará como propio, haciéndose cargo de la legalización de la situación de los detenidos y en su caso de

**AUDIENCIA PROVINCIAL
DE SEGOVIA
Presidencia**

dictar la correspondiente orden de protección. Una vez legalizada la situación del detenido, desde el Juzgado de Guardia de Segovia se procederá a su inhibición a favor del de Cuéllar, para su tramitación ordinaria una vez que la situación de clausura haya concluido.

Si fuese precisa la realización de alguna diligencia penal fuera del órgano judicial de carácter penal, como levantamiento de cadáver, deberán ser realizadas por Juez titular del Juzgado de Sepúlveda, como sustituto natural del juez que presenta sintomatología, manteniendo las debidas medidas de precaución.

- Actuaciones necesarias de Registro Civil: La expedición de licencias de enterramiento, como las restantes definidas en la Instrucción CGPJ de darse el caso, serán recibidas por la Sra. LAJ del Juzgado de Cuéllar quien se encargará de su tramitación y su comunicación a la empresa funeraria que la solicite, cuando se trate de licencia de enterramiento. En otro caso las solicitudes de particulares se deberán hacer previa cita telefónica o por correo electrónico, a cuyo fin en la puerta de la sede judicial deberá colocarse en lugar visible el teléfono o dirección de contacto. Tanto la solicitud como la comunicación se efectuarán en la medida de lo posible por medios telemáticos.
- Diligencias urgentes en materia civil: En las decisiones sobre internamientos o medidas del art. 158 CC, se procederá de idéntica forma que en el caso de detenidos o asuntos de violencia de género antes descrito.

Notifíquese por vía email este acuerdo la Sr. Juez de Primera Instancia e Instrucción de Cuéllar, al Sr. Magistrado Juez Decano de Segovia y a la Sra. Magistrada Juez de Guardia.

Comuníquese asimismo al Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para su elevación por su conducto a la Comisión de Seguimiento, si se crease y a la Comisión Permanente del CGPJ si fuese preciso; así como la Ilre. Colegio de Abogados e Ilre. Colegio de Procuradores de Segovia. Comuníquese finalmente a la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia, a la Sra. Secretaria Coordinadora y al Sr. Presidente de la Junta de Personal.

Póngase en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que se proceda conforme a lo acordado, de forma que cuando se

**AUDIENCIA PROVINCIAL
DE SEGOVIA
Presidencia**

produzca un detenido o una actuación de violencia contra la mujer, sin perjuicio de que se pueda informar la Juez de Cuéllar, el detenido y atestado se presenten ante el Juzgado de Guardia de Segovia capital, previa comunicación con el mismo.

Contra este acuerdo cabe interponer recurso de alzada en el plazo de cinco días ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Así lo acuerda y firma D. Ignacio Pando Echevarría, Presidente de la Audiencia Provincial de Segovia.

